

## **El antisemita, el liberal, la insolente y la amante.**

### **Luchas en torno de la disciplina y la autoridad en la formación del maestro argentino**

Enrique Garguin  
(UNLP-CISH; SUNY-SB)

La presente ponencia constituye un desprendimiento de un proyecto que se ocupa de la formación histórica de la clase media argentina. Es ampliamente reconocido el papel que le cupo a la escuela en la “nacionalización” de los hijos de inmigrantes y en la transmisión de los valores de la modernidad a la heterogénea población de la “era aluvial”. Como estos valores se hayan estrechamente ligados a la pertenencia a la clase media, me dirigí hacia las maestras no sólo por constituir el más numeroso grupo ocupacional femenino de clase media, sino también por su rol de transmisoras de esos valores, por su actuación disciplinadora. En el camino, me encontré con este otro aspecto: el proceso de disciplinamiento de aquellos elegidos para disciplinar. En este texto deseo exponer algunas lecturas preliminares de cuatro historias concernientes a cuatro docentes que fueron presa de la maquinaria burocrática del Consejo Nacional de Educación durante los años '30 y '40.

En *La máquina cultural*, Beatriz Sarlo analiza magistralmente el relato de una maestra perfectamente adaptada a esa inmensa y efectiva máquina cultural que fue la escuela estatal. En este caso, el “robot estatal” fue un resultado del normalismo, con todo lo que ofrecía a sus alumnas más humildes no sólo en lo que respecta a posibilidades ciertas de ascenso económico, sino también de apropiación simbólica y adquisición de capital cultural y social. Los casos que me propongo analizar aquí muestran otra cara del proceso, y con ello, otra dinámica. Transcurren, también, en otro momento –los años '30.

Ellos muestran, si se quiere, algunos límites del normalismo en sí mismo para producir sus “robots estatales”, y con ello, el lado más directamente represivo del disciplinamiento estatal respecto de los docentes, encargados de disciplinar al conjunto de los futuros ciudadanos. Más allá de la diversidad que presentan los cuatro casos, la preocupación principal por parte de las autoridades del Consejo Nacional de Educación (en adelante, CNE) parece ser siempre la misma: la disciplina, el respeto por la autoridad y las jerarquías. También la moral. Se ven, asimismo, maestros más activos, o al menos, más autónomos en su accionar respecto de lo ordenado por los superiores. Maestros que no se preocupan demasiado por vivir de acuerdo a los cánones morales del magisterio, que manifiestan su disconformidad, que luchan por que les sean reconocidas sus propias nociones de la docencia, o que sencillamente reclaman contra lo que ven como medidas arbitrarias de parte de sus superiores. Maestros también que, a pesar de lo anterior, no son necesariamente menos partidarios de la disciplina y la autoridad (llegando alguno incluso al autoritarismo fascista). Sus historias nos introducen en el lado conflictivo del proceso de formación del maestro argentino. Lo hacen desde casos individuales, aunque una indagación preliminar a las prácticas de la Asociación de Maestros de la Provincia de Buenos Aires permite aseverar que algunas de las preocupaciones que guiaron a estos individuos eran compartidas por grupos más amplios de docentes.

En otro orden, las lecturas que propongo matizan y complementan las interpretaciones más corrientes referidas a las intervenciones represivas ejercidas por las autoridades del CNE surgidas del golpe de junio de 1943. La persecución ideológica que las caracterizó ha llevado a que se las presente como de ruptura total con las gestiones precedentes. Los casos aquí presentados constituyen un complemento a los más conocidos de represión político-ideológica y muestran que aquellas intervenciones

represivas también se insertaban, bien que de un modo sobre-actuado, en tradiciones de más largo aliento y profundo arraigo.

## EL LIBERAL

A fines de 1943 Carlos M. Velásquez, director de la escuela N° 192, localizada en Belle Ville, Córdoba, fue investigado por sus ideas políticas. El inspector Alberto Casal Castello había acusado de comunista y de posible participación en un “movimiento” con otros izquierdistas. ¿Cuáles eran los fundamentos de tales acusaciones? Velásquez había dado conferencias y publicado artículos en *La Voz del Interior* y revistas locales sobre temas educativos, entrando en desacuerdos públicos con el Presbítero local debido a su defensa de la enseñanza laica.

Finalizadas las indagaciones del caso, en febrero de 1944, la denuncia es desestimada tanto por el Inspector de Zona, Cabanillas, como por la Inspección Seccional Córdoba. De acuerdo con lo recabado, se desprendía que Velásquez no era un conspirador comunista, sino un liberal, partidario de la enseñanza laica. Recomendaban, eso sí, llamar la atención a Velásquez para que moderara sus intervenciones públicas, provocadoras de discordia.

Hasta aquí nada excepcional dentro de la maquinaria burocrática del CNE, excepto quizá por el excesivo celo vigilante del inspector Casal Castello, el que seguramente había sido estimulado por la explícita adhesión al nacionalismo católico adoptada por la intervención al CNE.<sup>1</sup> Sin embargo, cuando el expediente llegó a la

---

<sup>1</sup>Luego de unos breves días en que el Alte. Elbio Anaya se hizo cargo del Ministerio de Justicia y Educación acompañado por el Ctlte. Gully como interventor del CNE, ambas posiciones fueron ocupadas desde octubre de 1943 por el reconocido escritor de tendencia nacionalista católica, Gustavo Martínez Subiría (Hugo West) y Ramón Loyarte respectivamente, autores de los decretos de pase a disponibilidad de todo el personal dependiente de educación, y de imposición de la enseñanza religiosa en todos los

Comisión Especial del CNE, se habían producido nuevos cambios políticos, y con ellos, el célebre José Ignacio Olmedo había asumido la intervención del CNE.<sup>2</sup>

La dirección del expediente cambió entonces de rumbo. Carlos Vázquez fue exonerado, y el Inspector de la Seccional Córdoba fue apercibido severamente por haber propuesto medidas harto inadecuadas. Los considerandos de la resolución resultan significativos, por cuanto muestran cuanto se había extendido la definición del enemigo político a extirpar, desde la previa circunscripción del mismo al agitador comunista:

“[Teniendo en cuenta que Velásquez] es de ideas liberales. Organizó una campaña a favor de la enseñanza laica en la escuela.

“Que [...] hombre de ideas disolventes, ateo, enemigo de la implantación religiosa en las escuelas, permitiéndose decir [...] que es un atentado contra la libertad de culto, que expresa la constitución [...]

“Que ha sido integrante activo de ‘Acción Argentina’. [...]

“Considerando:

“Que la patria necesita maestros de verdad, que vivan de la fe, la tradición, del alma nacional, y que ésta se prolongue en los alumnos;

“Que el superior Gobierno ha implantado [...] la instrucción religiosa en la Escuela [...]”<sup>3</sup>

---

establecimientos nacionales. En su discurso de nombramiento de Ramón Godofredo Loyarte como interventor del CNE, el ministro de Justicia e Instrucción pública, Martínez Zubiría, “estableció una secuencia entre ‘ciudadano’ y ‘soldado’, en alusión al sujeto que debe formar la escuela y prolonga la escuela en el hogar y el hogar en Dios, de donde dedujo que en la escuela debe reinar un ambiente cristiano bajo el signo de ‘la más pura argentinidad’. Tradicionalismo, religión y patriotismo se tornaban términos cargados de connotaciones militares en el discurso educativo de la revolución de 1943.” (J. L. Bernetti y A. Puiggrós, *Peronismo: Cultura política y educación (1945-1955)*, Editorial Galerna, Buenos Aires, 1993, p. 84)

<sup>2</sup> José Ignacio Olmedo (también reconocido militante del nacionalismo católico) sucedió a Loyarte el 25/3/44, luego de la renuncia de Ramírez a la primera magistratura y su reemplazo por Edelmiro Farrell (acompañado por Perón como Vicepresidente de la Nación). “Olmedo exacerbó el elemento militarista en el discurso pedagógico oficial y trató al cuerpo docente como si fuera un regimiento. La uniformidad ideológica del cuerpo le pareció indispensable y cuando, presionado por la opinión pública y la docencia, el 3 de junio de 1944 anunció por Radio del Estado que levantaría el mencionado ‘estado de comisión’, advirtió que lo haría previa separación de los ‘elementos indeseables’ (Bernetti y Puiggrós, 85-6)

<sup>3</sup> Consejo Nacional de Educación, expediente 23744, Letra L (Córdoba), año 1943.

La medida tomada, la exoneración de Velásquez (por liberal y no por comunista), no constituyó, por cierto, un acto aislado. Los pocos meses de gestión de Olmedo han sido recordados (no sin justicia) por la persecución ideológica ejercida, llegada en muchos casos a las cesantías y exoneraciones, aunque luego de un primer momento particularmente brutal, debiera poner freno a sus intervenciones y dar marcha atrás en muchos casos, debido a la fuerte oposición que encontrara y a las crisis que atravesaba el régimen —causas, ambas, que también determinarían su alejamiento del gobierno en septiembre de 1944.

De acuerdo con la prensa opositora, Olmedo había cesanteado por cuestiones políticas y en tan sólo unos pocos meses a 389 docentes, de los cuales para marzo de 1945 habían sido reincorporados 138 por el propio Olmedo y otros 115 por su sucesor.<sup>4</sup> Desde el oficialismo no se desmentía la versión opositora, aunque se discriminaban las causas de los distintos casos.

“...una comisión especial [...] ha trabajado activamente para desentrañar la verdad, aconsejando en numerosos casos cesantías y exoneraciones por actos de **indisciplina** y **mal ejemplo, ideologías extremistas e inmoralidad comprobada.**”<sup>5</sup>

Las causas políticas eran de este modo diluidas al ser conjugadas con otras causales que gozaban de mayor consenso. Indisciplina, mal ejemplo, inmoralidad, constituían desde antaño motivos de castigos disciplinadores (si no de la exoneración), como veremos más adelante. Y es en este sentido en que la peculiar virulencia de las intervenciones de Olmedo encuentra su lugar en la historia. Su particularidad reside en el excesivo celo y

---

<sup>4</sup> *La Prensa* del 19/3/45 (citado en Puiggrós y Bernetti, 194-5)

<sup>5</sup> Edelmiro Farrell, 1944 (subrayado del autor), cit en R. Cagliano y C. Cao, “Educación y política: apogeo y decadencia en la historia argentina reciente. (1945-1990)”, en A. Puiggrós y C. Lozano, *Historia de la educación Iberoamericana*, T1, Miño y Dávila editores, Bs. As., 1995, pp. 35-36. De los 115 cesantes que quedaban luego de la intervención de Ataliva Herrera, sucesor de Olmedo, *El Monitor* informaba las siguientes causas: 31 por actividades contrarias a la Nación; 22 por inmoralidad; 14 por antecedentes

brutalidad puesto al servicio de una causa que lo excedía en mucho: el afán por la disciplina y el respeto a la autoridad; las intervenciones disciplinadoras y moralizantes del sistema educativo no ya con sus alumnos sino con los propios docentes

También en lo estrictamente político, su gestión debe caracterizarse por la exageración, más que por la excepción. Durante los gobiernos de la década infame no habían faltado las exoneraciones por cuestiones políticas ni los intentos por abandonar el laicismo en la enseñanza. Sin duda, no se había llegado al extremo de considerar a los liberales como enemigos de la patria, pero los años '30 habían vivido un creciente avance de formas autoritarias en el ámbito de la educación, fundamentalmente –aunque no sólo– en media y superior.<sup>6</sup> En este sentido, la persecución al comunismo no era nueva y su aplicación al campo docente no carecía de antecedentes.<sup>7</sup> Un elemento de este avance, que difícilmente pueda separarse del avance de la Iglesia católica,<sup>8</sup> lo constituye el avance del antisemitismo.<sup>9</sup> Uno de los casos renombrados de la época fue el informe que elaborara el inspector Hohl acerca de la escuela de Moisés Ville, Santa Fe, en el que se

---

judiciales; 11 por mejor servicio; 11 por mal desempeño; 6 antecedentes policiales; 6 delitos; 4 por faltas graves; 3 inconducta y 7 por licencia excedida. (Citado en Puiggrós (1992), p.85)

<sup>6</sup> Ver Adriana Puiggrós, “Introducción” y “La educación argentina desde la reforma Saavedra-Lamas hasta el fin de la década infame. Hipótesis para la discusión”, en A. Puiggrós (dir.) *Escuela, Democracia y orden (1916-1943)*, Galerna, 1992 y Juan Carlos Tedesco, *Educación y sociedad en la Argentina (1880-1945)*, Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires, (4ta. Ed.) 2003, pp. 199-241.

<sup>7</sup> Ya Uriburu había creado la Sección Especial contra el Comunismo de la Policía de la Capital (A. Rouquié, *Poder militar y sociedad política en la Argentina*, Emecé Editores, 1981, vol. 1 p.224). Para el campo docente ver Puiggrós, “La educación argentina desde...”, p74, donde menciona la cesantía de la docente y dirigente gremial mendocina Florencia Fossatti, y Tedesco quien cita circulares del CNE de 1933 en que se condena las doctrinas comunistas. Las persecuciones serían reconocidas por el propio Justo, quien admitió al final de su mandato que el gobierno “ha expulsado de la cátedra sin miramientos a los profesores que han revelado ser hombres de odios antinacionales.” cit. en Tedesco, p.229.

<sup>8</sup> Ver Loris Zanatta, *Del estado liberal a la nación católica. Iglesia y Ejército en los orígenes del peronismo. 1930-1943*, Universidad Nacional de Quilmes, 1996.

<sup>9</sup> Ver Daniel Lvovich, *Nacionalismo y antisemitismo en la Argentina*, Vergara, Buenos Aires, 2003, quien señala: “En los ámbitos estatales las situaciones en que se manifestaban formas de discriminación y rechazo eran múltiples, sin que la situación variara de manera notoria bajo las presidencias de Justo, Ortiz y Castillo. No se trataba del resultado de políticas dispuestas desde la cumbre del Estado, sino de un conjunto de prácticas adoptadas por un conjunto de funcionarios y empleados diseminados en diversas ubicaciones, que resultaban tolerados por el poder político.” (p.449). Concretamente respecto de la educación, Lvovich menciona que este antisemitismo se manifestó en la confección de informes claramente antisemitas por parte de algunos inspectores, como así también de docentes abiertamente antisemitas y, en ocasiones, la conformación de núcleos de esa tendencia, cual fuera el caso del Colegio Nacional de Santa Fe. (454-55)

sostenía que los judíos constituían “una raza sin patria, sin bandera y sin ley” y se recomendaba la inmediata separación de sus cargos de los maestros judíos.<sup>10</sup> Augusto Bunge, en un reportaje, mostraba su indignación por el hecho, agravado porque, según se decía, el informe había sido en verdad elaborado por el director de la escuela. Estimaba, asimismo, que se debía expulsar al inspector –y al director, de comprobarse su autoría– aunque era escéptico al respecto, profetizando que seguramente sería ascendido.<sup>11</sup>

## EL ANTISEMISTA

El informe del Visitador Hohl no parece haber repercutido desfavorablemente para su suscriptor dentro de la maquinaria del CNE. Sin embargo, un año después, en febrero del 35, el director de la escuela N° 54 de Moisés Ville, José Manuel Magallanes, era suspendido en sus funciones a raíz de un juicio que se le sustanciara por violación a una menor. Habiendo obtenido una sentencia favorable en el juzgado de primera instancia, Magallanes solicitó en octubre ser reincorporado en sus funciones para continuar así cumpliendo como hasta entonces su “apostolado”, esa “sagrada misión encomendada por el gobierno de mi Patria”. Ensayó, asimismo, una explicación de la situación judicial en que se vio envuelto con un discurso cargado de patriotismo, religiosidad y antisemitismo que no eludía identificarse también con la tradición liberal sarmientina.<sup>12</sup>

En defensa propia y “de esa moral del maestro argentino”, Magallanes alegó que todo se había tratado de un “complot” judío.<sup>13</sup> Un individuo “de nacionalidad judaica, sin

---

<sup>10</sup> *Noticias Gráficas*, 1-12-33 “Un inspector escolar pidió se expulse a los judíos de la docencia y otros cargos”.

<sup>11</sup> *Ibid.* No se equivocaba respecto del Visitador Hohl, a quien para 1936 ya vemos ascendido a Inspector Nacional de Escuelas. Respecto del director de la escuela, su trayectoria será bien distinta, aunque, como veremos enseguida, no parece que su antisemitismo fuese motivo de preocupación por parte de las autoridades.

<sup>12</sup> Consejo Nacional de Educación, expediente 3323, Letra Juzgado, año 1935 (salvo indicación expresa, toda la información de este caso surge del citado expediente).

<sup>13</sup> De acuerdo con Lvovich (*op.cit.*), la teoría del complot judío ocupó un lugar especial en el tránsito desde los tradicionales prejuicios anti-judíos de inspiración católica hacia el moderno antisemitismo político que sirvió de articulador principal del pensamiento nacionalista de derecha.

ocupación de ninguna naturaleza”, lo había acusado de violar a “una hija menor que desempeñaba las funciones de sirvienta en mi hogar.” (f.8)<sup>14</sup> Pero el denunciante no era más que “el vulgar ‘testaferro’ [...] que venía a prestarse a una maquinación, meticulosamente estudiada por los componentes de la clásica ‘KADIMA JUDAICA’”, que se encontraba en contra de su escuela desde hacia algún tiempo. Los acusadores, inspirados “en bajos sentimientos de bastardas cerebraciones sectarias”, habían actuado con la finalidad de reemplazarlo e “imponer en la enseñanza de la niñez de Moisés Ville criterios en pugna con los fundamentos básicos de nuestra argentinidad.” La “campana iniciada por el PUEBLO JUDIO de Moisés Ville” era –siempre según Magallanes– consecuencia de la publicidad dada al informe del Visitador Luis Hohl (ver *supra*), en el que se “puntualizaba la situación real de la Escuela Argentina en el pueblo de Moisés Ville, formado casi exclusivamente por ciudadanos judíos.” Pero Magallanes negaba la versión que lo sindicaba como autor del informe:

“siendo la fiel expresión de la verdad, [el informe] no había sido ni inspirado ni siquiera conocido por el suscrito, hasta el día en que quizá un infiel empleado de la Inspección obtuvo una copia, y por intermedio de algún familiar [...] lo hizo llegar a la ‘KADIMA JUDIA’ para ser publicado [...] en el semanario de publicidad judía titulado ‘EL ALBA’.”<sup>15</sup>

Asimismo, la conspiración judía no tramaba en soledad:

“este maestro argentino (...) debió defenderse contra la influencia de políticos demoprogresistas que aspiraban a la satisfacción plena de los sentimientos judíos de Moisés Ville (...) ante la acusación del Sr. Fiscal Dr. Pedro Yedlin, hijo del Presidente de la ‘KADIMA JUDIA’ Y ‘Comuna Municipal’; ratificada con pura literatura por el

---

<sup>14</sup> Se observa aquí una significativa estrategia complementaria de descalificación de los acusadores: amén de judíos, ellos son denigrados por su ubicación socio-ocupacional –un padre desocupado y una menor sirvienta.

<sup>15</sup> El subrayado se encuentra en el original, hecho con lápiz, por un lector anónimo, presumiblemente en alguna de las instancias del sumario.



inescrupuloso Juez Dr. Bergallo. [Triunfa, sin embargo] el sagrado ministerio de la enseñanza [ya que] la verdad triunfa siempre, cuando ella esta basamentada en los principios sabios y nobles que nos dieron PATRIA Y RELIGIÓN.”

Si la extensión y ramificaciones de los mentados complots suelen constituir un elemento de su eficacia a la hora de articular discursos nacionalistas, en el caso de Magallanes, pudo ser este, por el contrario, un elemento que le ganara enemistades dentro de la burocracia del CNE. Así, aunque el ataque al Partido Demócrata Progresista pudiera estar en consonancia con los ataques que por el mismo tiempo le dirigía el gobierno nacional, no sería de extrañar que dentro de la burocracia del CNE hubiera muchos simpatizantes demócrata-progresistas. Más aún, Magallanes sembraba sospechas sobre la existencia de un “infiel” en la burocracia del CNE; despotricaba contra su superior, el Visitador Hohl, por no haber éste concurrido a declarar al juzgado; y requería que se investigara “por qué medios y quiénes fueron los empleados de la Inspección Seccional que extrajeron una copia del informe del Sr. Hohl, brindándolo a la ‘Kadima Judaica’ [...] porque ello implica la defensa del magisterio argentino nativo.”<sup>16</sup>

Al no obtener respuesta afirmativa a sus reclamos –el fin de la suspensión, en primer lugar-, Magallanes insistió dos meses después con un estilo incluso más abiertamente antisemita, e incrementando sus quejas respecto de ciertos funcionarios educativos. Escribió entonces “más que como docente, como argentino”; lamentando que lugares como Moisés Ville fuesen “un estado dentro de otro estado”; denunciando que “en cada pueblo tratan al nativo con la desconsideración que es común en ellos...”; y proclamando que, como “maestro ARGENTINO Y CRISTIANO”, no aceptaba que se

---

<sup>16</sup> Magallanes pedía asimismo que se realizaran ciertos cambios de reorganización de la escuela pedidos con anterioridad “que importan la defensa del concepto argentinista, en el plan modelador de la juventud estudiosa”, máxime en momentos en que ya había probado su inocencia “ante la diatriba, la infamia y la malidicencia del pueblo judío de Moisés Ville”. Agregaba que tampoco su esposa, Maria Roulet de Magallanes, también maestra de la escuela 54, podía ya enseñar en ese “ambiente unánimemente adverso;

sometiera “nuestro nacionalismo, haciéndonos judaizantes”. Entre los enemigos de la escuela nacionalista y de su propia persona, amén de ciertos personajes del sistema educativo, señalaba a los maestros Salzman y Bublick como “maestros hebreos” que estaban “en contra de la escuela de la Nación” y querían “arrasar con todo lo argentino”. Consideraba que enseñar “en este ambiente exótico dentro de nuestro país”, entre esos “descendientes de Judas”, resultaba un trabajo arduo, que sin embargo no podía abandonarse porque también había “niños argentinos, hijos de argentinos nativos y católicos y de extranjeros no hebreos” a los que no se podía dejar al desamparo. Nativos que se encontraban con una gran sensación de injusticia “al verse colocados en la picota de sus enemigos naturales que hoy gozan y cantan en sus sinagogas tan rotundo triunfo al ver a un cristiano argentino en desgracia.” (f.12)

A fines del 35 algunas instancias de la vasta estructura del CNE propusieron trasladar a Magallanes y Sra., pero se decidió no innovar. Por ello, el 6-6-36, habiendo sido absuelto también por la Cámara de apelaciones en el juicio por violación, Magallanes insistió en sus pedidos, exigiendo una reparación moral. Ya “remarqué con lujo de detalles la influencia nefasta de la población judaica de Moisés Ville”, sostuvo, reiterando los tonos patrióticos de su discurso y denunciando la falta de entereza del inspector Hohl y las ideas comunistas de algunos maestros, todos ellos protegidos del poder político, cuyas trayectorias eran contrastadas con la suya propia:

“Mi contracción al trabajo, mi plena responsabilidad en la misión encomendada, me había colocado en la calificación que correspondía dentro del magisterio [“?”, pone el lector anónimo]; carecía de ‘recomendaciones políticas’; jamás había servido de parafrutero de políticos, y mi cerviz se había inclinado en gesto de sumisión a los que mandan. [“!”]

---

donde se está expuesto continuamente a esa malidicencia, a la infamia solapada y a las maquinaciones injuriosas de una secta militarizada en dogmas sectarios y anti-patrióticos.”

agrega el lector] Pero hubo intromisión política, me sentí huérfano del apoyo de la Superioridad y lesionado el espíritu de Sarmiento.”

El 10 de junio de 1936 se le levantó la suspensión por cuanto Magallanes ya no tenía cuentas pendientes con la justicia, anulándose asimismo una disposición de 1934 por la que no se le podía degradar la categoría de la escuela bajo su cargo.<sup>17</sup> Por ello se dispuso para él y su esposa de una escuela de chacras, que Magallanes rechazó indignado por considerarla humillante (insistiendo en sus diatribas contra el ahora Inspector Hohl, al que consideraba autor de esa designación). Se les asignó entonces una escuelita rural en La Selva y aunque su rechazo recibió un “no ha lugar” como respuesta, los Magallanes resistieron no haciéndose cargo de sus funciones y multiplicando las cartas de protestas y pedidos. En ellas reiteraron las diatribas contra “el pueblo judío de Moisés Ville” y contra ciertos funcionarios del CNE. Acusaron al inspector viajero Méndez Barr de “animosidad manifiesta” por negar la “conspiración judía”. Denunciaron haber recibido castigos injustos y reclamaron “que esa Honorable Presidencia [del CNE] ofrezca al maestro argentino, que fue calumniado por el pueblo judío de Moisés Ville [...], la seguridad de que podrá presentar todos los descargos...” (f.267) ya que, cuando creían llegada “la hora de los premios a la contracción del trabajo” (f.261) “reciben el ataque

---

<sup>17</sup> Esta medida se basaba, aparentemente, en el informe de Estadísticas, en el que quedaba clara la larga historia problemática de Magallanes, que incluía 4 traslados forzados por distintas inconductas o problemas con sus subalternos; 5 apercibimientos, 3 de ellos “severos” y una “advertencia” en el sentido de que de seguir con problemas y desacatos sería exonerado (esto último ocurrió en 1926, antes de los 3 últimos apercibimientos y 2 traslados). Un dato llamativo de este informe es el uso de eufemismos –por decirlo eufemísticamente– para mencionar las causales de sus problemas. Así, en este informe se mencionan: suministrar datos inexactos, “quejas” en su contra, “expresiones de desconsideración”, “traslado por mejores servicios” –que en la página siguiente descubrimos se trató en verdad de “actos reñidos con la moral”–. Deberán pasar 8 años para que otro funcionario del CNE descubra en las mismas fuentes (los archivos de la Dirección de estadísticas, que no figuran en el expediente, y sólo los conocemos por los informes incorporados al último) que de una de las escuelas de las que fue trasladado “salió poco menos que corrido por motivos de orden privado”: en la 201 “se le acusa de deshonestidad en su comportamiento con la maestra y las alumnas mayores, desatención, suspensión y expulsión de alumnos”, no habiendo prosperado la acusación de deshonestidad porque Magallanes acusó “a los modestos vecinos” por injurias y calumnias; en la escuela 1 tuvo incidentes con dos maestros y se le acusó de violación y embarazo de una menor, siendo la denuncia policial posteriormente retirada; finalmente, en la escuela 72 volvió a tener

injusto, solapado, desleal e inhumano de una secta regimentada” y Magallanes es suspendido en sus funciones. Pero la justicia “ha dicho de la vileza y falsedad de esa secta anti-patriótica de Moisés Ville”. Finalmente reclamaban por su traslado a La Selva, pues nada había en el lugar para la educación de sus hijos.

En abril de 1937 Magallanes le escribió al presidente del CNE, Octavio Pico (carta que después considerará privada, protestando contra su inclusión en el expediente como una intromisión en su vida privada) solicitándole que no castigase a su mujer. Reiteraba su lucha contra los judíos de Moisés Ville -“y hoy con los del mundo entero”, agregaba. Asimismo, le enviaba una foto suya e invocaba su amistad (pretendidamente común), construida en aquella lucha, con el Arzobispo N. Fassolino<sup>18</sup> y el diputado nacional Reinaldo Pastor.

Todos estos reclamos fueron realizados por los Magallanes sin haberse hecho cargo de sus nuevos puestos en La Selva, por lo que en junio del 37, considerándoselos ya “en situación de desacato” luego de numerosos llamados al cumplimiento de su deber, se los intimó a presentarse en 10 días o atenerse a la exoneración.

Varias interpretaciones son posibles respecto de estas decisiones del CNE. No caben dudas de que Magallanes había sido protegido por alguno/s de sus superiores desde

---

problemas con su personal, por lo que fue trasladado a la 54 que carecía de otros docentes a excepción de su esposa.

<sup>18</sup> Fasolino asumió el obispado de Santa Fe en 1933, en medio de grandes conflictos entre la iglesia y el gobierno provincial demoprogresista, llamado “democrático-bolchevique” por parte de Acción Católica, que también acusaba a sus maestros laicos de adoptar una “bibliografía judaica con ligeros matices de pornografía sexual” según palabras expresadas en el 6º Congreso pedagógico de Santa Fe (cit en Zanatta, 1996: 100). En este contexto, Fasolino decidió nacionalizar el conflicto, aseverando que el origen de tantos enemigos del catolicismo en Santa Fe era porque como país “hemos abrazado como hermanos a los que proclaman la abolición de la patria”. Para frenar tal desvarío, se debía desenmascarar al “liberalismo injusto y anticonstitucional” y al “materialismo histórico desacreditado”. Los que consideraba enemigos de Dios, la Patria y la familia, no eran, para él, “dignos del nombre de argentinos” (cit. en Zanatta, 1996: 101). Según este autor, Fasolino era uno de los “más aguerridos” antiliberales con que contaba la Iglesia, no siendo casual que lo designaran a la tan conflictiva y laica Santa Fe. Para su biografía, *Boletín de la Junta de Historia Eclesiástica Argentina*, N° 2, 1967.

antaoño<sup>19</sup> y que aún gozaba de cierta protección.<sup>20</sup> Por otro lado, el destino que se le otorgó constituía claramente una forma de castigo, sin que el expediente aclarase las razones del mismo. La imagen que surge es que sus antiguos apoyos, sin dejar de considerarlo un “amigo”, habían llegado al límite de lo posible, o que, sin llegar a constituirse en un enemigo o un indiferente al que se desease expulsar del sistema, Magallanes se había convertido en un ser molesto. Resulta harto dudoso que la razón del cambio fuese su antisemitismo: ya hemos visto que el visitador Hohl, lejos de ser castigado por su informe, fue ascendido poco después, y que Magallanes consideraba a su ex compañero de ruta autor intelectual de su traslado. Puede pensarse que muchos dudaran de su inocencia en la violación de la menor y, no pudiendo alegarlo explícitamente puesto que había sido declarado inocente por la justicia, decidieran darle un castigo. Esta hipótesis parece desmentida por el hecho de que se ocultaran sus antecedentes de delitos sexuales; aunque este ocultamiento también podría leerse en sentido contrario: resultando engorroso hacer explícita la intención de castigarlo (y recordemos que Magallanes no es castigado, sino sencillamente trasladado, para lo cual sobran motivos dada su enemistad con la población de Moisés Ville), la sola mención de sus antecedentes hacía inevitable algún tipo de consideración al respecto.<sup>21</sup> Finalmente, en sus notas Magallanes no guardó el menor decoro, cubrió a muchos de sus superiores de improperios, llegando a acusar a la superioridad toda de abandonarlo ante los ataques sufridos, lo que al mismo tiempo sembraba dudas acerca de su connivencia

---

<sup>19</sup> Así lo indica la larga serie de conflictos que compone su historial, sin que se hubiera pasado de traslados a lugares de igual jerarquía y amenazas infructuosas.

<sup>20</sup> Por un lado, había mas de un elemento para que Magallanes recibiera algún castigo explícito, si no la cesantía (con la que ya había sido amenazado en 1926) debido a los improperios y acusaciones infundadas realizadas contra algunos de sus superiores, hechos que, como veremos luego, no eran considerados menores por las autoridades del CNE. Por otro lado, resulta clara la intención de protegerlo en la síntesis eufemística de su historial que se incorpora al expediente (ver n.17).

<sup>21</sup> De todos modos, como veremos luego, la sola sospecha (sin necesidad de comprobación) de inmoralidad, si esta era pública, bastaba en otros casos para imponer castigos, por lo que en verdad no es seguro que resultara demasiado engorroso castigar a Magallanes por este motivo si esa era la intención.

con no-argentinos y politiqueros vendepatrias. Como veremos luego, las cuestiones de disciplina y respeto a la autoridad no eran cuestiones menores para el CNE. Y sin embargo, también podría argumentarse que de ser este el motivo no hay razones para no hacerlo explícito: los propios escritos de Magallanes habrían resultado prueba inmejorable para condenarlo por indisciplinado, irrespetuoso de las jerarquías y rebelde ante la autoridad. Dejemos por ahora estas dudas y volvamos a su historia.

Luego de 2 años de insistentes reclamos, todos denegados, el matrimonio Magallanes pareció resignarse a vivir y trabajar en el perdido paraje de La Selva. Pero el golpe de junio del 43 abrió nuevas esperanzas reparadoras en el alma magallánica. Así, con fecha 25-8-43 los Magallanes volvieron a dirigirse al presidente del CNE –en ese momento bajo la intervención del Ctlte. Gully. En esta carta se presentaban como dos “maestros argentinos” que, no obstante sus buenas calificaciones probatorias de “esa contracción y disciplina en el trabajo diario”, hacía más de 7 años que sufrían, reclamaban y esperaban en el inhóspito Chaco Santafesino. Siete años hacía ya que luchaban en ese ambiente “desprovisto de todas las comodidades que corresponden a dos maestros que han formado un hogar y que han brindado hijos, ya maestro uno desde hace 4 años, sin haber conseguido puesto.” Se auto-definían como patriotas a los que la superioridad había abandonado, y pedían entonces que llegase a ese abandonado rincón de la nación “un de esa obra patriótica, grande e inmensamente justa del actual Sr. Presidente de la Nación, Gral. Pedro P. Ramírez, representado tan dignamente por Ud. en la Presidencia del Honorable Consejo Nacional de Educación.” Reiteraban sus denuncias contra el pueblo judío de Moisés Ville y sus ramificaciones políticas, que ahora extendían explícitamente al CNE, donde habría habido por mucho tiempo fuertes influencias de “la secta judaica” y los traslados y ascensos habrían sido por “cuña política”.

Días después, Magallanes logró ver la totalidad del expediente, en cuyos actos encontraba “pruebas claras” de “violaciones flagrantes y manifestaciones definitivas de animosidad que ha guiado el espíritu de algunos de mis superiores...”, según denunciaba en carta fechada el 25-9-43, dirigida al Inspector Nacional de Escuelas, Félix Didier. Como muestra de las primeras, señalaba la inclusión en el expediente de una foto y carta que enviara al Presidente del HCNE, Pico, y que Magallanes considera de carácter personal. Finalmente, pedía resarcimientos por todas las injusticias sufridas.

El informe de Didier se limitó a reseñar este último pedido, enviando el expediente al Asesor Letrado, quien considerándolo infundado, propuso archivarlo nuevamente. Sin embargo, al día siguiente (5-10-43) el Inspector Viajero, Burgos, envió todo nuevamente a la regional Santa Fe, donde el Sub-Inspector de Provincias decidió dar curso a que se considerase el pedido de revisión de todo lo actuado. La inspección Seccional de Santa Fe el 5-1-44 consideró que no había sido ni “arbitrario ni injusto e ilegal” el proceso que llevara a Magallanes a ejercer en La Selva; que éste acusaba ridículamente de haberse violado su correspondencia personal; y que acusaba a ex-superiores sin fundamentos.

“La nueva presentación del Sr. Magallanes deja la sensación de aquel que quiere beneficiarse a río revuelto, presentándose como una víctima inocente, con quien sus superiores han cometido toda clase de felonías; formula cargos usando expresiones desconsideradas”.

A pesar de estas conclusiones, propuso una pena leve atento a sus años de servicio: informarle que no se tomaba en consideración su reclamo de salarios por improcedente; suspenderlo por dos meses por no haber observado la prevención que se le hiciera en 1926; y advertirle que, de insistir con sus reclamos y denuncias infundados se lo

separaría de su cargo. El Inspector Viajero Dionisio Chaile compartió los términos formulados por Didier, agregando en sus fundamentos:

“En el año 1943 [...] Magallanes se presenta nuevamente solicitando reconsideración de lo dictaminado por el Honorable Consejo saliente al Sr. Interventor del mismo, Contralmirante Gully, en **forma desmedida y haciendo cargos contra sus superiores, todos ellos sin fundamentos...**” (f.318)

El expediente pasó entonces al Inspector General de Provincias, S. Soler, quien propuso hacer más leve la pena, manteniendo la advertencia, pero quitando los 2 meses de suspensión. La Asesoría Letrada, por su parte, consideró fuera de lugar toda la reapertura del expediente, ya que ésta sólo podría haberse realizado por una nueva resolución del Consejo –o decisión de su presidente- y no por decreto del prosecretario.

Así, en punto muerto, estaban las cosas cuando Olmedo asumió la intervención del CNE. Entonces, con fecha 10-5-44 el CNE decidió convertir en exoneración el traslado de Magallanes de 1936; trasladar a María Roulet de Magallanes a un paraje más favorable;<sup>22</sup> y apercibir al Inspector General de Provincias, Soler, por haber dado curso a la reapertura del expediente. En los considerandos se pasaba revista a su historia (ver n. 17), fundamentando sus decisiones en que por alguna razón había sido denunciado reiteradamente, quedando asimismo en claro que también reiteradamente había sido Magallanes protegido por la sección Santa Fe; que su nueva presentación importaba “un verdadero alzamiento”; que resultaba humanitario no mantener a su esposa en lo inhóspito y que no eran necesarias otras formalidades puesto que todo el personal había sido declarado en comisión por la intervención.

---

<sup>22</sup> A pesar de sus reiteradas quejas acerca de las condiciones de vida en La Selva y los igualmente repetidos pedidos de traslado, María Roulet de Magallanes rechaza en julio del '44 el traslado y solicita se le otorgue la dirección de la escuela de La Selva, en reemplazo de su marido exonerado. Pedido este que recibe respuesta favorable.



En este caso, los motivos del castigo eran explicitados. Tanto el Inspector Viajero como la Inspección Seccional Santa Fe remarcaron las infundadas acusaciones a superiores y la “forma desmedida” y las “expresiones desconsideradas” usadas en sus escritos. Disciplina. Autoridad. Jerarquía. Nada de antisemitismo. El Consejo, en cambio, sí hacía mención a las denuncias reiteradas, las que incluía en un racconto sin eufemismos. Y hay un dato más, que sirve para medir, cierto que de un modo impresionista, el peso de estos elementos en el universo mental de las autoridades educativas. El antisemita, nacionalista y católico Magallanes fue exonerado por unas autoridades que nunca ocultaron su pertenencia al nacionalismo católico ni sus sentimientos antisemitas.<sup>23</sup> Disciplina, Autoridad, Jerarquía y, quizá, Moralidad, parecieron así estar por encima de las identificaciones ideológicas en su escala de valores.

La medida, por otro lado, no constituyó un exabrupto de la dupla Olmedo-Llambías (aunque pueda tener ciertos ribetes excesivos en cuanto a la pena dictada), ni un punto de inflexión en la historia del CNE. Ya vimos que dos funcionarios de carrera compartieron a grandes rasgos los considerandos del dictamen firmado por Llambías y, como veremos luego, esas consideraciones estuvieron lejos de resultar una excepción o de ser novedosas. Al mismo tiempo, todo lo que pueda considerarse de excepcional en la gestión de Olmedo no hace más que reforzar la fortaleza de esas continuidades que lo atraviesan cual si nada hubiese cambiado; poniendo de manifiesto el fuerte arraigo de valores ya consolidados en la estructura del sistema educativo argentino.

Pero tal vez estemos avanzando de forma apresurada, puesto que la historia de Magallanes no concluyó con la gestión Olmedo. A fines de 1944 el régimen de junio se

---

<sup>23</sup> La resolución que exonera a Magallanes fue firmada por Héctor Llambías en su condición de Secretario General del CNE, cuya presidencia ocupaba como interventor José Ignacio Olmedo.

encontraba a la defensiva respecto de una oposición que se fortalecía al ritmo de los avances aliados en Europa. Un elemento no menor de las críticas que le dirigía la oposición se refería precisamente a las purgas realizadas en el magisterio por Olmedo quien, incluso antes de renunciar se vio obligado a dar marcha atrás en muchas de las exoneraciones dictadas, política continuada por su sucesor, Ataliva Herrera. Puede presumirse que el caso de Magallanes fuese el único de todos los cesanteados por Olmedo que la oposición habría considerado legítimo. Pero este pescador “a río revuelto” no dejó pasar su oportunidad. En febrero y mayo de 1945 arribaron al CNE sendas peticiones firmadas por los “humildes vecinos” de La Selva solicitando que Magallanes fuera repuesto en su cargo. Para ello, invocaban no sólo palabras del Coronel Perón, sino también las críticas desatadas por las exoneraciones de Olmedo. Con suerte que no correrían las protagonistas de los casos que siguen, Magallanes fue reincorporado, con nuevo destino –su cargo en La Selva ya estaba ocupado por su mujer- en julio de 1945.

#### LA AMANTE

El 2 de abril de 1943 un tal Vega denunció ante el CNE a su esposa, Hilda Amanda Jaure, en razón de vivir ella en casa de otro hombre, el Dr. Draguntzky. Habiendo ya entablado una demanda de divorcio, Vega solicitaba a las autoridades educativas medidas a fin de evitar “que mi nombre sea difamado gratuitamente” ya que los comentarios acerca de su mujer “no son muy favorables ni concuerdan con la conducta que debe de observar una educacionista encargada de predicar moral a futuros ciudadanos argentinos.”(f.1)

La denuncia movilizó inmediatamente a la maquinaria del CNE; y a pesar de que el denunciante fue inmediatamente reconocido por el inspector a cargo de la pesquisa

como ex-convicto por homicidio y “corredor” de apuestas, decidió dar curso a la investigación puesto que el denunciante ofrecería el testimonio de “vecinos caracterizados” del lugar.

El Inspector de Zona, Dardo Herrero, realizó entonces una investigación exhaustiva que incluyó interrogatorio a la acusada y declaraciones de 62 testigos por escrito más otras entrevistas informales. Tanto en el interrogatorio a la acusada, como en las entrevistas a testigos, se realizaron las siguientes preguntas: ¿vive efectivamente la maestra en casa del Dr. Draguntzky?; ¿vive alguien más en la casa del Dr.?; ¿ha visto al Dr. y la maestra juntos en público?; ¿de que modo se traslada ella a la escuela?; ¿sabe si han vacacionado juntos?.

Hilda Amanda intentó una defensa denunciando el carácter tendencioso de las preguntas y la intromisión en su vida privada. El inspector por su parte, amén de señalar que la maestra mantenía desde la denuncia una licencia médica en su trabajo no renovada en forma y considerar que mentía al declararse “pensionista” del Dr., rechazó la alegada intromisión en la vida privada de la maestra de su investigación:

“No hay tal cosa, Sr. Inspector —escribió a su superior—: al tratar de investigar como viajaba de General Alvear [lugar de residencia del Dr. Dragusnsky] a Colonia Alvear Oeste [localidad de la escuela], [...] que se investigue si la vieron en publico en compañía del Dr. Dragusnky, si saben si realizó viajes [...] en compañía del Dr. Dragusnsky y si convive algún miembro de la familia del médico con éste en su casa no es inmiscuirse en la vida privada de ambos, ya que tales hechos se realizan en público. Es simplemente para velar por la moralidad del personal en servicio, recordando que una maestra debe ser ejemplo viviente de moralidad en la escuela, en la calle, en su casa, en lugares públicos, etc. Siempre es maestra.” (f.61)

Nótese la particular ambigüedad de la posición de la maestra en la Argentina de la época que, en este caso, la rotunda negación del derecho a su privacidad en cualquier ámbito – “siempre es maestra”- era precedida por una igualmente rotunda negativa a considerar que efectivamente se estuviera inmiscuyendo “en la vida privada de ambos”.

Asimismo, para este inspector-detective, la veracidad de la denuncia había quedado comprobada por las declaraciones de testigos bien seleccionados en su “calidad”, “a fin de que sus manifestaciones resultaran el fiel reflejo de la verdad”:

“Así, han declarado una gran cantidad de comerciantes, médicos, farmacéuticos, propietarios, jefe político, Intendente Municipal, ex Intendente Municipal, Juez de Paz, Jefe del Registro Civil, Jefe de Correos, Tesorero Municipal, empleado de Obras Sanitarias de la Nación, otros empleados municipales, toda gente responsable de sus actos y digna de dar fe a sus manifestaciones. Por otra parte, se trata de gente de alta figuración social y económica y de solvencia moral indiscutida.” (f.61-62)

La “verdad”, quedaba claramente conceptuada como monopolio de un grupo social específico: la gente decente.

Las conclusiones del informe resultan nuevamente reveladoras de los límites (en verdad su inexistencia) entre esferas pública y privada, como así también de la estrechez de lo que constituía una conducta moralmente aceptada: no resultaba necesaria la práctica de conductas consideradas inmorales, sino que la mera sospecha era suficiente para la condena.

“El suscrito es el primero en reconocer que se trata de una buena maestra, cumplidora de su deber y capaz; pero también reconoce que la inmoralidad de su esposo, no la habilita a ella a permitir que se sospeche de su falta de honestidad. Nadie [...la acusa] de tener relaciones ilícitas con el Dr. Dragusnsky, pero ciertas manifestaciones y hechos públicos permiten abrigar sospechas.” (f.62)

Finalmente, reaparece lo que más indignaba a los inspectores y demás empleados jerárquicos del sistema educativo: la “falta de respeto” a la autoridad, la indisciplina. Así, si la supuesta infidelidad era causa de condena, la duda respecto de la integridad de un superior, provocaba indignación. “Al parecer, a la Sra. De Vega no le inspira confianza ni lo actuado por el sumariante ni la actuación del Sr. Inspector ¿Habrás visto semejante osadía?” (f.63)

La osadía había sido solicitar el envío de otro sumariante que instruyera un sumario con todas las garantías, y esto a pesar de que la maestra no desconocía ecuanimidad al inspector, simplemente falta de garantías para su defensa en el proceso.

La conclusión del inspector de zona no dejaba lugar a dudas: casi todos los testigos habían manifestado que la Sra. De Vega y el Dr. Dragunsky eran vistos juntos en innumerables lugares públicos, hechos que “se prestan a que se sospeche algo que no condice con su condición de maestra.” (f.64) En vista de lo cual proponía se la suspendiera por 3 meses y se la trasladase a otra provincia. Asimismo, proponía llamar la atención a la directora de la escuela “por no haber dado participación a sus superiores de hechos que afectan el buen nombre de la Repartición.” (f.66) (16/7/43)

El expediente pasó por las distintas instancias de rigor dentro del CNE, en las cuales se recomendaron las mismas medidas propuestas por el inspector de zona, pero quitándose la suspensión por 3 meses (así recomendaron el Inspector Viajero, Juan P. Agustín, el Inspector General, Antonio Barberis, y la Asesoría Letrada (fs. 68, 70 y 71))

Sin embargo, el capitán de Fragata Máximo Koch, Director de la Comisión de Hacienda y Asuntos Legales, sostuvo el 1/9/43 que se la debía declarar cesante y “llamar seriamente la atención” a la dirección del establecimiento. En sus considerandos sostuvo que “se comprueba” que vive con Elías Dragunsky y que “no repara” en presentarse en

público con el Dr. De aquí “se deduce que esta docente no cuida los detalles de su vida privada; detalles que resultan un inaceptable desafío a las costumbres de nuestra sociedad.” Resultaba entonces necesario declararla en cesantía por ser una “profesional de actuación deficiente e irregular, y sus actos inmorales, inadmisibles en una maestra”,

“[que no sólo] carece del sentido de responsabilidad [...] sino que ha olvidado elementales reglas de decoro, gravitando en forma negativa en el buen nombre de la escuela y siendo desleal a la buena conducta que debió observar como educacionista, encargada de predicar moral a futuros ciudadanos argentinos.” (f.72-3)

Hilda Amanda Jaure de Vega fue dejada cesante al día siguiente, cesantía que sería revocada en mayo de 1944, cuando el celo de los responsables del CNE se vio potenciado y decidieron transformar la cesantía en exoneración, a fin de que “la sanción sea realmente ejemplarizadora”.<sup>24</sup> Hilda Amanda debió esperar hasta 1958 para que se hiciera justicia en su caso: en enero de ese año, las autoridades que reemplazaron a aquellas impuestas por el régimen oprobioso, volvieron a transformar la exoneración en cesantía...

“Inmoralidad comprobada”, sentenció Edelmiro Farrell, seguramente para caracterizar casos como el de Hilda Amanda. Nuevamente, el exceso de las autoridades de junio implica eso, un exceso y no una ruptura respecto de tendencias de más largo plazo y mayor arraigo (como lo muestran las idénticas consideraciones –aunque recomendando menores penas- de los funcionarios de carrera que analizaron su caso en las primeras instancias.

La inmoralidad no sólo aparece claramente ligada a cuestiones de libertad sexual, sino también, y como no podía ser de otro modo, a cuestiones de género. La comparación

---

<sup>24</sup> La Comisión Especial del Honorable CNE es la misma que exonerara al antisemita Magallanes, realizándose ambas en la misma resolución del 20/5/44 con la firma de Llambías.

con Magallanes parece obligada en este caso. Si eliminásemos el factor género, deberíamos concluir que la sospecha de tener relaciones sexuales ilegítimas resultaba mucho menos grave en caso de que el sospechoso las tuviera contra la voluntad del tercero en cuestión. Evidentemente, lo que muestra este absurdo, es la distinta posición ocupada por hombres y mujeres en el cuadro moral de la sexualidad. Con un agravante en este caso, debido a la situación particularmente ambigua de las maestras dentro de los valores dominantes: las maestras encarnaban una tensión constitutiva entre el modelo de familia burgués que debían impartir (y que incluía la reclusión de la mujer en el hogar) y su situación de trabajadoras. Por ello no podía aplicarse a ellas la distinción entre esfera pública y esfera privada. La totalidad de sus vidas se hallaba signada por estar privadas de los derechos pero sometidas a los deberes públicos.

## LA INSOLENTA

“Ha pretendido siempre una sumisión y acatamiento a su palabra de infalible y todopoderoso que se atribuye...” sostuvo en octubre de 1934 la Srta. Mosquera, maestra santafesina, en su denuncia contra un inspector Visitador ante el CNE. Emilio Pugnali, el Visitador en cuestión, la habría insultado cuando Mosquera osó plantear una crítica a sus procedimientos: “No se para qué estudian si son unas inmorales, unas incultas, no tienen roce social y no comprenden que deben callarse ante el inspector” le habría espetado aquel.

“Todos estos insultos por qué? –continuaba Mosquera en su denuncia- Por no ser adúltera, por no comulgar con las injusticias...”. “Queremos personas superiores moral e intelectualmente para poder ver en ellas a autoridades respetables”, concluía su

denuncia, luego de aseverar la falta de seriedad del inspector que el año anterior había evaluado a los docentes de su escuela sin observar ninguna clase.<sup>25</sup>

Lo primero que llama la atención es que el Visitador reconocía lo acaecido en términos similares, aunque sus conclusiones eran bien distintas: en su visión, la maestra había cometido una falta imperdonable al cuestionar los procederes de la autoridad. En su nota, no dudó en recomendar “que se adopte una medida severa y ejemplificadora para terminar con los ‘conatos revolucionarios’ de elementos.” (Id. F.9) ¿En qué había consistido el “conato revolucionario? El inspector había tomado evaluación a un curso hasta después de la hora de salida y Mosquera había realizado un comentario crítico al respecto. Llamado como testigo por parte del Visitador, el director de la escuela, ratificó la actitud de la maestra como “altisonante”, “descortés” y “agresiva” y recomendó también “medidas severas”. Según este testimonio, el inspector llevó a la maestra a la dirección,

“donde le dijo cuatro o cinco veces, <Quién es Ud. Aquí para criticar y observar lo que hace el visitador? ¿Qué cree Ud. Que soy yo aquí?, no sólo puedo tomar pruebas unos minutos después de la hora de salida, sino que puedo convocar al personal los días domingo, si lo creo necesario>. Le dijo que lo que acababa de hacer era una torpeza, una falta de consideración al superior, una indisciplina y un alzamiento [...]” (f.6)

En su segunda nota, la maestra –que de acusadora se perfilaba ya como acusada- reiteró que el director y el visitador eran amigos, y los calificó de “energúmenos”. (f.11) Pugnali, por su parte, insistió en calificarla de “insolente” y “espíritu levantisco”, reivindicando su propia actuación como visitador

“en cumplimiento de una de sus obligaciones primarias y en salvaguarda del principio de autoridad jerárquica, disciplina, respeto y en consideración que todo maestro debe tener

---

<sup>25</sup> Consejo Nacional de Educación, expediente 15799, año 1935 (incluye todas las providencias, desde la



para su superior, como también para la paz y buena marcha de la institución escolar.”

(f.12)

Asimismo, sostuvo que “todo es un <complot> perfectamente estudiado para trastornar las medidas de saneamiento [sic] moral que sigo en mis funciones.” Complot en el que la Srta. Mosquera actuaría “en perfecto entendimiento” en “los actos de rebelión y desacato a las disposiciones de sus jefes inmediatos”, con otra docente del mismo establecimiento, “con la que convive”.(f.15)

El expediente también incluye copias de intercambios anteriores (respecto de evaluaciones, etc.), entrando fugazmente en escena una tercera maestra, también “indisciplinada” crónica, al decir del Visitador. Dados estos antecedentes conflictivos, en septiembre de 1935 el Consejo decidió mantener la calificación de “bueno” que el visitador había puesto a las tres “señoritas”, asignar otro visitante para la escuela en cuestión, y, “como medida de buen gobierno”, trasladar a las tres docentes implicadas desde la escuela donde se desempeñaban, ubicada en Rufino, a tres pequeños poblados: Chovet, Maizales y Cañada Gómez. El carácter disciplinador de la medida resultaba claro y de nada sirvieron las protestas de las maestras, que insistieron en vano en que la denuncia había provenido de su parte –sin que nada se hiciera al respecto- y que ellas eran castigadas sin siquiera un sumario. Mosquera también reclamó al menos un nuevo destino, puesto que ni médico existía en Maizales. Este pedido obtuvo efectivamente respuesta parcial: se la envió a Acival, ante lo cual Mosquera fue prácticamente forzada a renunciar ya que poseía una farmacia en Rufino.

La disputa continuó por carriles que escapan en buena medida al expediente (incluyendo una querella judicial por injurias contra Emilio Pugnali) y, ante un último pedido de Mosquera de ser reincorporada en Rufino, en 1943 un nuevo inspector declaró

---

denuncia de la maestra de octubre de 1934 hasta su final en 1944), folios 1 y 2.

que, según se desprendía del expediente, Mosquera resultaba “carente del espíritu de disciplina, del concepto de jerarquía y de la decencia que debe ser elemental [...] en la educación.” (f.227) En 1944 su pedido de reincorporación fue definitivamente rechazado, exigiéndosele, además, el pago de un sellado.

Con este caso llegamos a uno de los núcleos del patrón disciplinario que creo descubrir en estos y otros expedientes similares del CNE. Distantes ya de la exageración de Olmedo (en este caso sólo intervino exigiendo un pago por sellado, lo que ciertamente habrá agregado indignidad a la descarriada, pero nada sustancial en los fundamentos de fondo), pero también del elemento moral-sexual, particularmente ríspido aunque no por ello menos significativo. Ya no hay ni política, ni violaciones, ni sexo -ese punto G de la moral burguesa-, sino Disciplina, Obediencia y Jerarquía en su forma más descarnada.

\* \* \*

Jerarquía, Autoridad, Disciplina y Moral constituían un elemento central de las corrientes autoritarias en boga en la época.<sup>26</sup> Pero no se limitaban a ellas. Por el contrario, de un modo más matizado –pero también más profundamente enraizado–, conformaban un sustrato mental mucho más extendido, tanto social como temporalmente. Mosquera y sus colegas fueron caracterizadas en 1935 de “insolentes”, “indisciplinadas”, “espíritu levantisco”, “altisonante”, “descortés”, “agresiva”. También Magallanes en los ‘30 fue considerado “en desacato” y pareció caer en desgracia ya fuera por indisciplinado y falta de respeto a la autoridad, o por inmoralidad, o por ambas razones. La amante Hilda Amanda, por su parte fue cuestionada a comienzos de 1943 (con fundamentos revalidados en 1958) en su moralidad por dar lugar a sospechas, oponiéndose a su

---

<sup>26</sup> Así, Ivanisevich ligaba a estos valores sus críticas al reformismo universitario: “la difamación, la calumnia, la mentira quiebran definitivamente la jerarquía, el respeto, y la disciplina [...] Sostengo que el cogobierno [al que catalogaba de ser “juez y parte”] establece una promiscuidad perniciosa entre profesores y alumnos.” (cit en Bernetti y Puiggrós, p. 141)

palabra la de la gente decente, “de alta figuración social y económica y de solvencia moral indiscutida”; también indignó que se dudase de la integridad de un superior.

Los propios maestros que sufrieron su aplicación estricta no necesariamente negaban esos valores como los valores básicos del magisterio. Discutieron, sí, los modos de su ejercicio concreto, sus aplicaciones extremas. Así, del discurso de Magallanes se desprende una queja que no impugnaba los valores en sí (todo lo contrario) sino lo que aparecería como una interpretación unilateral de su ejercicio: la falta del necesario contra-servicio de la autoridad. En su visión, el maestro debía ser disciplinado, obedecer las ordenes de la autoridad y respetar las jerarquías; pero éstas no debían olvidar sus deberes para con sus subordinados: protegerlos (“la superioridad me ha abandonado” era una queja reiterada), reconocer los sacrificios prestados, mantenerse alejados de la politiquería y, sobre todo, de la antipatria judaizante. Algo similar ocurre con la insolente, aunque aquí ya se abre a un cuestionamiento que incluye el derecho a cuestionar a la autoridad. “Queremos personas superiores moral e intelectualmente para poder ver en ellas a autoridades respetables” sostuvo. Acorde con ello, su crítica se centró en el ilegítimo abuso de poder, que controla autocráticamente, que insulta. Pero las críticas iban más allá cuestionando la infalibilidad de la autoridad y sobreponiéndole el ejercicio de derechos de los subordinados: los de los niños, primero, al cuestionar que se los dejase después de hora; el suyo propio a cuestionar una evaluación, a manifestar sus pareceres, como cualquier ser pleno de derechos. La amante, por su parte, cuestionó la legitimidad de la intromisión en su vida privada y, sin poner dudas sobre la integridad del inspector, solicitó más garantías de defensa. Ciertamente su propia práctica de convivencia extramatrimonial implicaba un serio cuestionamiento a valores dominantes de muy larga duración, al punto que, quizá, lo que más sorprenda de su caso sea la levedad de la pena propuesta en las primeras instancias.